

Los peligros de la privatización de los servicios públicos

El caso de la documentación de la libertad condicional en Gran Bretaña

MARÍA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

Un nuevo escándalo archivístico pone a Gran Bretaña en el centro de atención; esta vez se trata de la privatización del Servicio de Libertad Condicional. Según recientes informaciones, este Servicio se encuentra en una situación complicada tras una serie de fallos informativos



Miles de expedientes de delinquentes británicos se han perdido o borrado creando una situación de alarma social importante. A pesar de que el sistema se actualizó en el último mes de junio y se entregó más del 70% de la información al sector privado para su gestión, ban los delinquentes y que solamente la primera semana en la zona de Warwickshire tuvieron que rechazar a más de 30 reclusos debido a que el personal no tenía sus expedientes y no podían asegurar, por ejemplo, que no se tratase de criminales sexuales y, por consi-

directamente por el Estado para los delinquentes de alto riesgo. Este hecho dificulta el trabajo en común de ambos servicios, pues el sistema no permite al personal el acceso a ciertos archivos.

En unas declaraciones, el ministro de Justicia en la som-



el personal del Servicio de Libertad Condicional afirma que existen tantos problemas técnicos que han provocado una crisis en la gestión del servicio. Entre otros incidentes está el de que no se han podido añadir los nuevos delitos a los expedientes y las autoridades judiciales desconocen qué delinquentes rechazan o terminan el servicio comunitario. David Adams, del Sindicato de Funcionarios de Libertad Condicional, afirmó que, entre otros problemas, los oficiales no podían registrar las horas de servicio comunitario que desarrolla-

guiente, excluidos para trabajar en proyectos escolares.

El Servicio de Libertad Condicional fue reorganizado en abril de este año sustituyendo las 35 administraciones existentes por 21 sociedades de rehabilitación comunitaria (CRC). Las nuevas entidades constituidas con personal del Servicio de Libertad Condicional y contratistas privados están esperando gestionar y poner en marcha esas CRC. Además, el Gobierno está estableciendo paralelamente un Servicio Nacional de Libertad Condicional, que será gestionado

bra, el laborista Sadiq Khan, confesó que la seguridad pública había estado en peligro por esta crisis. Y UNISON, el Sindicato de Servicios Públicos británicos, afirmó que ya había advertido al Gobierno de que "esta reestructuración masiva de los sistemas de información de la libertad condicional tenía muchas posibilidades de funcionar mal".

Todo ello afianza el caos de la privatización de los servicios públicos. Ian Lawrence, secretario general del NAPO (asociación profesional que representa a los trabajadores de la

libertad condicional y de los tribunales de familia) hizo un llamamiento urgente al Gobierno para que pusiese fin a estas reformas, permitiendo que la infraestructura sea puesta en marcha y se pruebe debidamente este nuevo sistema para asegurarse de que no se pone en riesgo la seguridad pública”.

Por su parte, el Gobierno contestó a través del portavoz del Ministerio de Justicia que en el momento en que se había producido algún problema del sistema de información el Gobierno había trabajado directamente con el personal del Servicio de Libertad Condicional para solucionarlo rápidamente y que, a través del contacto permanente con los tribunales, no se había producido ningún incidente serio. Estas declaraciones no hacen sino maquillar un problema que sigue sin una solución eficaz. ■

